

9ª REUNIÓN — 5ª SESIÓN ORDINARIA — 26/27 DE JUNIO DE 1983

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,  
doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ;

del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor EDISON OTERO;

del señor presidente de la Comisión de Interior y Justicia,  
doctor CELESTINO A. MARINI,

y del señor presidente de la Comisión de Legislación General,  
doctor ALBERTO J. RODRÍGUEZ SAA

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN

---

SENADORES PRESENTES:

ALMENDRA, Ramón A.  
BENÍTEZ, Alfredo L.  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BRASESCO, Luis A. J.  
BRAVO HERRERA, Horacio F.  
BRITOS, Oraldo N.  
CASTRO, Jorge A.  
CELLI, Felipe  
CONCHEZ, Pedro A.  
DE LA RÚA, Fernando  
FALSONE, José A.  
FERIS, Gabriel  
GASS, Adolfo  
GIL, Francisco  
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.  
GURDULICH de CORREA, Liliانا I.  
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo  
LAFFERRIERE, Ricardo E.  
LEÓN, Luis A.  
MARINI, Celestino A.  
MARTIARENA, José H.  
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.  
MAUHUM, Fernando H.  
MAZZUCCO, Faustino M.

MENEM, Eduardo  
MURGUÍA, Edgardo P. V.  
NÁPOLI, Antonio O.  
NIEVES, Rogelio J.  
OTERO, Edison  
RIVAS, Olijela del Valle  
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.  
SAADI, Vicente L.  
SALIM, Luis  
SÁNCHEZ, Libardo N.  
SOLANA, Jorge D.  
TRILLA, Juan  
VELÁZQUEZ, Héctor J.  
VIDAL, Manuel D.  
VILLADA, Francisco R.  
WOODLEY, Kenneth W.

AUSENTES, CON AVISO:

AMOEDO, Julio A.  
BITTEL, Deolindo F.  
LECONTE, Ricardo G.  
MALHARRO de TORRES, Margarita  
SAPAG, Elías  
SIGAL, Humberto C.

## SUMARIO

## I. Asuntos entrados:

- I. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 697.)
  - II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita acuerdo. (Pág. 697.)
  - III. Comunicación de la Presidencia de la Nación. (Pág. 697.)
  - IV. Comunicaciones oficiales. (Pág. 697.)
  - V. Dictámenes de comisiones. (Pág. 697.)
  - VI. Peticiones particulares. (Pág. 698.)
  - VII. Proyecto de comunicación del señor senador Gil por el que se solicita la inclusión de una partida para el zoológico y acuario de San Juan en el presupuesto de 1986. (Pág. 698.)
  - VIII. Proyecto de comunicación del señor senador Castro por el que se solicita la firma de un protocolo adicional interpretativo del Acta de Colonia. (Pág. 698.)
  - IX. Proyecto de comunicación del señor senador Gil por el que se solicita la reglamentación de títulos profesionales otorgados por universidades estatales y privadas. (Página 699.)
  - X. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes acerca del servicio de teleprocesamiento de textos y gráficos a través de la red telefónica. (Pág. 700.)
  - XI. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes acerca de las conclusiones de la Comisión de Estudio de los concursos públicos de adjudicación de licencias de radiodifusión. (Pág. 701.)
  - XII. Proyecto de comunicación del señor senador Marini por el que se solicita se declare de interés nacional la obra Paraná Medio, construcción del cierre sur Chapetón y disposiciones complementarias. (Pág. 701.)
  - XIII. Proyecto de declaración del señor senador Saadi sobre transferencia de parcelas a la provincia de Catamarca. (Pág. 702.)
  - XIV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Rivas y Marini por el que se solicitan informes acerca del retiro de un busto del ex presidente Juan Domingo Perón. (Pág. 703.)
  - XV. Proyecto de declaración de los señores senadores Rivas y Marini por el que se expresa interés en la reposición de un busto del ex presidente Juan Domingo Perón en la Universidad Tecnológica Nacional. (Página 703.)
  - XVI. Proyecto, de ley del señor senador Salim por el que se prohíbe la exportación de vagones ferroviarios de carga fabricados en el país. (Pág. 705.)
  - XVII. Proyecto de comunicación del señor senador Nápoli y otros señores senadores por el que se solicita la equiparación de jubilaciones de profesores de escuelas privadas con los docentes estatales. (Pág. 705.)
  - XVIII. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez y otros señores senadores por el que se solicita una rebaja para el tráfico radiotelefónico con estaciones en la Antártida. (Pág. 706.)
  - XIX. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez y otros señores senadores por el que se solicitan créditos para viviendas destinadas al personal de bases antárticas. (Pág. 706.)
2. Moción de preferencia del señor senador Trilla para considerar en la próxima sesión el proyecto de ley en revisión sobre gravámenes a depósitos bancarios. Se aprueba. (Pág. 707.)
  3. Homenajes rendidos por varios señores senadores a la memoria del general Martín Miguel de Güemes, de Carlos Gardel, y al 50º aniversario del Protocolo de la Paz del Chaco. (Pág. 707.)
  4. Moción de preferencia formulada por el señor senador Britos para considerar en la próxima semana con despacho de comisión o sin él, el proyecto de comunicación del que es autor por el cual se solicitan informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre cuatro acordadas referidas a los paros realizados por los trabajadores judiciales. Se aprueba. (Pág. 716.)
  5. Consideración del proyecto de ley en segunda revisión por el que se delega en la Corte Suprema de Justicia y en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de fijar sus remuneraciones. Se aprueba la sanción de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 716.)
  6. Consideración del proyecto de ley del señor senador Villada y otros señores senadores por el que se establece un régimen transitorio de coparticipación federal de impuestos. Se aprueba. (Pág. 733.)
  7. Moción del señor senador Nápoli de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 17. Se rechaza. (Página 744.)
  8. Consideración del dictamen de las comisiones de Combustibles y de Energía en el proyecto de declaración del señor senador Nieves por el cual se solicita un subsidio para el Ministerio de Obras Públicas de Formosa. Se aprueba como proyecto de comunicación. (Pág. 745.)

9. Consideración del proyecto de declaración del señor senador Martiarena y otros señores senadores referido a las facultades del Congreso de la Nación con respecto al decreto 1.096/85, sobre creación del nuevo signo monetario denominado "austral". No se vota por falta de quórum. (Pág. 746.)

#### 10. Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 777.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 43 del miércoles 26 de junio de 1985:

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

### I

#### ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

### I

#### Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 18 de junio de 1985, por el que se declaran, junto con la Honorable Cámara de Diputados, huéspedes oficiales del Honorable Congreso de la Nación al señor jefe de la Delegación Parlamentaria de Corea del Sur y secretario de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, y a los miembros integrantes de ella. (A sus antecedentes.)

—Decretos del 19 de junio de 1985, por los que se aceptan y agradecen las donaciones sin cargo al Honorable Senado, efectuadas por los pintores Juan Carlos Durán, Raquel Palumbo, Enrique Nani, Angel Laddaga, Nelly Alvarez y Dignora Pastorello, de obras de su producción. (A sus antecedentes.)

—Comunica que el señor senador Berhongaray ha elevado un informe sobre su reciente viaje a la República Federal de Alemania, Noruega y España, que contiene temas referentes a energía nuclear, deuda externa, satélites, unidades de combate, organización militar, relaciones bilaterales, electrónica y aspectos generales de defensa, y cuyos antecedentes se encuentran a disposición de los señores senadores en la Presidencia.

—Comunica que ha tomado conocimiento del informe elevado por la comisión de funcionarios que concurrió a las IX Jornadas Argentinas y I Jornada del Norte Argentino de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

### II

#### Acuerdo

Mensaje del Poder Ejecutivo en el que solicita acuerdo. (A la Comisión de Acuerdos.)

### III

#### Comunicación de la Presidencia de la Nación

Acusa recibo de la comunicación sobre declaración de interés nacional del "Segundo Congreso Nacional de Vivienda Rural". (A sus antecedentes.)

### IV

#### Comunicaciones oficiales

La Municipalidad de San Rafael, Mendoza, solicita el desbloqueo de volúmenes de vinos provenientes de viñedos afectados por diversos factores. (A la Comisión de Comercio.)

—La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza envía anteproyecto de ley por el que se instituye la libreta de trabajo. (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

—La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur envía resolución por la que se crea una comisión legislativa para solicitar la provincialización territorial. (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

—El Concejo Deliberante de Clorinda, Formosa, adhiere a los proyectos de ley sobre transferencia de tierras fiscales. (A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.)

—La Municipalidad de Vicente López adhiere a la participación de los municipios en lo recaudado para el FONAVI. (A sus antecedentes.)

—La gobernación de la provincia de Buenos Aires envía declaración del Senado provincial por el que solicita la derogación de la ley 22.250 (Régimen laboral para el personal de la industria de la construcción). (A sus antecedentes.)

—La Municipalidad de Berisso, Buenos Aires, envía resolución referente a la liquidación del Banco de Berisso Cooperativo. (A la Comisión de Economía.)

—El Concejo Deliberante de La Matanza, Buenos Aires, envía declaración en la que se solicita la reactivación de las industrias metalúrgicas SIAM. (A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Industria.)

—El Concejo Deliberante de Clorinda, Formosa, adhiere al proyecto de ley referente a jubilaciones para trabajadores en zonas de fronteras. (A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Defensa Nacional.)

### V

#### Dictámenes de comisiones

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES, DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley de los señores senadores Menem y Sánchez por el que se instituye la "Defensoría del Pueblo" en el ámbito del Congreso de la Nación. (Al orden del día.)

ASUNTOS CONSTITUCIONALES:

En el proyecto de ley del señor senador Villada y otros señores senadores, por el que se modifica la ley

señor presidente y Honorable Cámara; es aquella casta educada en los centros de poder de donde salen los *masters*, que también nos condujeron a nosotros a esta situación. Me refiero a esa clase dirigente apátrida, venal y entreguista, que es la misma en cualquier latitud de América. Ellos son los responsables de este estado de cosas; nos llevaron a esto sin pensar que la historia no se detiene. El avance de los pueblos es lento, a veces torpe, paquidémico; pero donde pone el pie, aplasta.

El mundo que los hombres soñamos se conseguirá con el aporte de todos. Ese es el esfuerzo que demanda la hora actual para recuperar nuestro país y ayudar a nuestros hermanos que formaron parte de la América hispana.

Disponemos de todo lo necesario para que nuestros pueblos puedan ponerse en marcha; Bolivia tiene gas y hay hierro en El Mutún, lo que servirá para una integración real en el Cono Sur.

Es necesario alertar a todos, señor presidente, en estos momentos en que la corrupción moral ha llegado al límite. El hombre americano cayó en la trampa del exitismo y le interesa más ir detrás de la moneda, de la moda o de cualquier tilinguería que atender los verdaderos intereses de nuestro país americano que debemos recuperar de una vez por todas.

Debemos empeñarnos todos en esta tarea a fin de trazar el camino a nuestros hijos, tal como nos lo trazaron nuestros mayores. Es necesario que se comprenda que la vida, que es una aventura, debe ser vivida en un marco de justicia, libertad y dignidad. Debe darse la debida difusión a los episodios desgraciados que ocurren en América, a fin de que se sepa que son el exponente del manejo de los poderes mundiales.

La Argentina es garante en uno de los problemas limítrofes de nuestra América, el suscitado entre Ecuador y Perú. Por ello, debemos poner todo nuestro esfuerzo para impedir que nuestros hermanos peruanos y ecuatorianos terminen como Paraguay y Bolivia. No debemos olvidar que la zona en litigio —cosa rara— también es petrolera.

Por las razones expuestas adhiero fervorosa y sinceramente a esta recordación en nombre del bloque justicialista, y hago votos para que no sea ésta la última vez que señalemos estas lacras, para que las generaciones venideras sepan por qué nos encontramos en esta situación y cuál es el desafío del porvenir. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente.** — Con las palabras pronunciadas por los señores senadores, quedan rendidos los homenajes, a los que la Presidencia adhiere.

4

#### MOCION DE PREFERENCIA

**Sr. Britos.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Señor presidente: hace aproximadamente un mes suscribí un proyecto de comunicación por medio del cual se solicitan informes a la Corte Suprema sobre cuatro acordadas referidas a los paros que habían realizado nuestros compañeros judiciales.

Tengo entendido que el citado proyecto se encuentra aún en la Comisión de Asuntos Constitucionales por lo que solicito que el mismo sea tratado la próxima semana con despacho de comisión o sin él.

**Sr. Presidente.** — En consideración la moción de preferencia formulada por el señor senador por San Luis.

Si no se hace uso de la plabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobada la preferencia. (*Aplausos.*)

5

#### REMUNERACIONES DEL PODER JUDICIAL Y AUTARQUIA DE DICHO PODER

**Sr. Presidente.** — Continúa la sesión con el tratamiento de los asuntos con preferencia.

Corresponde considerar el proyecto de ley, en segunda revisión, por el que se delega en la Corte Suprema de Justicia y en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de dictar sus remuneraciones y las de quienes presten servicios en sus respectivas áreas.

La Presidencia observa que es de aplicación el artículo 71 de la Constitución Nacional, y que en el supuesto de insistir el Honorable Senado se requiere mayoría de dos tercios.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Macris).** — (*Lee*)

#### Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(13 de junio de 1985)

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Déjase sin efecto, para la fijación de las remuneraciones de los funcionarios no pertenecien-

tes al Poder Judicial de la Nación, toda vinculación mediante coeficientes, índices u otro tipo de referencias con las retribuciones que perciben los magistrados judiciales de la Nación. En su reemplazo, tal vinculación quedará establecida con el sueldo del presidente de la Nación —excluidos los gastos de representación—, manteniéndose las relaciones porcentuales existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley que estuvieran referidas directa o indirectamente al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 2º — Lo dispuesto en el artículo 1º también será aplicable a la determinación de haberes jubilatorios, retiros y pensiones que correspondan a funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo nacional, quedando modificadas, a ese solo efecto, las normas que las prevén y los artículos 1º, 2º y 5º de la ley 21.540.

Art. 3º — Facúltase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la promulgación del Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio 1986, a fijar la remuneración total de sus miembros. Esta remuneración no podrá exceder, en el mes de abril del año en curso la cantidad de pesos argentinos cuatrocientos treinta mil (\$a 430.000).

Con la misma limitación temporal, se faculta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a establecer adicionalmente, para los magistrados y/o funcionarios, una compensación funcional, la cual no podrá superar el 25 % (veinticinco por ciento) de la remuneración total sujeta a aportes correspondiente a su categoría y no será computada a los fines de la aplicación de las escalas porcentuales de la ley de facto 22.969.

Art. 4º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, hasta la promulgación del Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio 1986, a determinar la remuneración correspondiente al presidente de la Nación dentro de las previsiones presupuestarias correspondientes.

Art. 5º — Derógase el primer párrafo del artículo 57 de la ley 23.110 a partir de la fecha en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga uso de la facultad que se le delega en el artículo 3º de la presente ley.

Art. 6º — Esta ley se aplicará a partir del mes de su sanción y en ningún caso implicará una rebaja nominal en las remuneraciones del personal a que se refiere.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

#### ANTECEDENTE

#### Sanción de la Honorable Cámara de Senadores del 11 de abril de 1985

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Déjase sin efecto, para la fijación de las remuneraciones de los funcionarios no pertenecientes al Poder Judicial de la Nación, toda vinculación mediante coeficientes, índices u otro tipo de referencias con las retribuciones que perciben los magistrados judiciales de la Nación. En su reemplazo, tal vinculación quedará establecida con el sueldo del presidente de la

Nación —excluidos los gastos de representación—, manteniéndose las relaciones porcentuales existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, que estuvieran referidas directa o indirectamente al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 2º — Lo dispuesto en el artículo 1º también será aplicable a la determinación de haberes jubilatorios, retiros y pensiones que correspondan a funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo nacional, quedando modificadas, a ese solo efecto, las normas que las prevén y los artículos 1º, 2º y 5º de la ley 21.540.

Art. 3º — Facúltase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la promulgación del presupuesto general de la Nación correspondiente al ejercicio 1986, a fijar la remuneración total de sus miembros. Esta remuneración no podrá exceder, en el mes de abril del año en curso, la cantidad de cuatrocientos treinta mil pesos argentinos (\$a 430.000).

Con la misma limitación temporal, se faculta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a establecer adicionalmente, para los magistrados y/o funcionarios y/o empleados, una compensación funcional, la cual no podrá superar el veinticinco por ciento (25 %) de la remuneración total sujeta a aportes correspondiente a su categoría y no será computada a los fines de la aplicación de las escalas porcentuales de la ley de facto 22.969.

Art. 4º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, hasta la promulgación del presupuesto general de la Nación correspondiente al ejercicio 1986, a determinar la remuneración correspondiente al presidente de la Nación dentro de las previsiones presupuestarias correspondientes.

Art. 5º — Derógase el primer párrafo del artículo 57 de la ley 23.110 a partir de la fecha en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga uso de la facultad que se le delega en el artículo 3º de la presente ley.

Art. 6º — Esta ley se aplicará a partir del mes de su sanción y en ningún caso implicará una rebaja nominal en las remuneraciones del personal a que se refiere.

Art. 7º — El Tesoro nacional aportará los fondos necesarios para atender las mayores erogaciones que se originen en jurisdicción de las provincias, por la adecuación que se produzca en las remuneraciones de los magistrados y agentes que se desempeñen en los respectivos poderes judiciales, como consecuencia de la sanción de la presente ley y en la medida de su incidencia.

El mencionado aporte tendrá carácter de no reintegrable y el crédito necesario será incorporado al presupuesto general de la administración nacional, con cargo al resultado del ejercicio.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Sr. Presidente.** — En consideración en general. Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Señor presidente: el proyecto en consideración fue oportunamente analizado por este cuerpo y modificado según lo acordado por las distintas bancadas, especialmente en cuanto al artículo 3º, en el que encuadrábamos también a funcionarios y empleados judiciales, y

con respecto al artículo 7º, que agregamos, teniendo a que el Tesoro nacional socorriera a las provincias para dar cumplimiento a su texto.

Entendemos que la Cámara baja ha modificado esos textos con alguna ligereza. El bloque justicialista va a insistir en la modificación al artículo 3º y en el agregado del artículo 7º. Precisamente, ese artículo 7º fue consentido por los compañeros judiciales porque significa un principio de solidaridad. Es decir, el empleado judicial en Buenos Aires debe ganar lo mismo que el empleado judicial de Salta, o el de Ushuaia o el de cualquier otra parte. Parece que algunos no han podido entender este principio. No obstante, teniendo en cuenta que el gremio así lo sostiene, este bloque justicialista va a mantener la posición preanunciada.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — El bloque justicialista está totalmente convencido de que este proyecto de ley debía tratarse con celeridad y urgencia. Por ese motivo, en la sesión anterior acompañó con su voto la solicitud de tratamiento preferencial para que se obtuvieran los dos tercios necesarios.

Apoyamos el pedido de tratamiento con urgencia de este asunto porque sabemos los problemas por los que atraviesa la familia judicial. También estamos totalmente convencidos de que es totalmente justa la autarquía que establece este proyecto de ley para regular las formas y la fijación de las remuneraciones por la Corte Suprema a todo el Poder Judicial, así como también para que se desenganche a otros sectores de la administración del Poder Judicial porque siempre se apeló al argumento de que aumentar los sueldos a los jueces significaba un gasto excesivo, pues con ellos estaba enganchada gran parte de la administración pública. Por ello consideramos sumamente justa esta autarquía y el desenganche de otros sectores porque va a permitir, de una vez por todas, que los jueces, los funcionarios y empleados judiciales tengan los sueldos que corresponden.

Pero el bloque justicialista tiene problemas y no está de acuerdo con la forma como ha tratado la Cámara de Diputados este proyecto de ley. En principio, el artículo 7º que habíamos agregado ponía en un pie de igualdad a todos los judiciales del país porque prácticamente todas las provincias anhelan tener los mismos sueldos que los empleados judiciales y los magistrados nacionales, pues sus remuneraciones son superiores. Se trata de una vieja lucha de la familia judicial de las provincias y al incor-

porar el artículo 7º estábamos brindando la oportunidad a todas las justicias provinciales de acceder a ese derecho que obtienen los jueces, magistrados y funcionarios nacionales. Por eso incorporamos el artículo 7º y por eso ahora creemos que la supresión por parte de la Cámara de Diputados puede traer como consecuencia planes de lucha y huelgas en las provincias, ya que nuestros gobernadores no van a poder pagar los mismos sueldos que cobrarán los magistrados, funcionarios y empleados de la justicia nacional. Por ese motivo vamos a insistir en el artículo 7º, ya que es la única forma de que en nuestras provincias se pueda gobernar con calma y que las justicias provinciales puedan estar a la misma altura que la nacional.

Pero también nos preocupa la manera como ha tratado la Cámara de Diputados el famoso porcentual, que es un derecho que por muchos años han tenido los compañeros trabajadores judiciales, que cada gobierno democrático les restauraba y cada dictadura militar les suprimía. Nosotros habíamos logrado una fórmula de equilibrio suscrita por todos los bloques y votada por unanimidad en este cuerpo cuando incorporamos aquella cláusula del 25 por ciento, en la cual estaban incluidos también los compañeros trabajadores judiciales. Incluso el bloque justicialista hizo una distinción, pues nosotros queríamos que se suprimiera la partícula "o", para que no hubiera duda de que en todo lo referente al porcentual entraban los magistrados, los funcionarios y también los trabajadores judiciales.

Por eso yo creo que con la supresión del 25 por ciento para los trabajadores se ha desvirtuado absolutamente el régimen del porcentual; pienso que ya no podemos decir que los compañeros judiciales gocen del porcentual, si es que se acepta la sanción de la Cámara de Diputados. En efecto, según establece la ley, en abril de 1985 los miembros de la Corte Suprema no podían tener un sueldo mayor de 430 mil pesos. En ese momento un empleado que en el régimen vigente hasta ahora ganaba el 50 por ciento, tenía como consecuencia un sueldo de 215 mil. Pero al elevar el sueldo del ministro de la Corte en un 25 por ciento se llegaba aproximadamente a 537 mil, y entonces ese empleado, al quedarse en 215 mil ya no ganaba el 50, sino solamente el 40 por ciento.

Y si seguimos desarrollando ese sueldo en el tiempo, vemos que el régimen del porcentual queda suprimido. Supongamos que con la inflación que hemos tenido los argentinos, la remuneración del ministro de la Corte llegara a duplicarse. Su sueldo alcanzaría aproximada-

mente a 1.075.000 pesos argentinos; y si todavía le agregamos un 25 por ciento, ya estamos en 1.343.000. Pero al mismo tiempo aquel empleado del ejemplo no va a tener un aumento proporcional; no va a ganar ya el 50 por ciento, ni tampoco el 40, sino mucho menos: a la segunda o tercera duplicación, el sueldo del empleado va a quedar solamente en el 20 por ciento.

Quiere decir que con esta interpretación que yo hago desaparece totalmente el régimen del porcentual. Entonces les vamos a tener que decir la verdad a los compañeros trabajadores judiciales: que con la sanción que viene de la Cámara de Diputados queda absolutamente derogado ese sistema que era un derecho de ellos.

Por eso los senadores justicialistas vamos a votar tal como nos comprometimos en el acuerdo al que llegamos cuando este tema se trató en el Senado, en el sentido de que en el régimen del 25 por ciento estaban incluidos los compañeros trabajadores y empleados judiciales. Vamos a votar, pues, tal como entonces, con la partícula "y" solamente. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Señor presidente: voy a referirme a las disposiciones del conocido artículo 7º, en lo referente a la financiación por el Tesoro nacional. La sanción de esta ley implica modificaciones en lo relativo a la autarquía del Poder Judicial y en cuanto a los sueldos o remuneraciones, tanto de los magistrados como de las jerarquías dependientes. Vamos a sostener la misma posición que oportunamente defendimos cuando este Senado trató en primera instancia la sanción producida por la Cámara de Diputados del proyecto que le remitiera el Poder Ejecutivo.

Entendemos que si se aprobara este artículo 7º se estarían tratando dos situaciones diferentes en una misma ley. Por un lado, consideramos no meramente oportuna sino necesaria la rapidez en la sanción de esta ley, sin que tenga nuevos tropiezos en adelante como consecuencia de la presencia de disposiciones que entorpecieron hasta la fecha esa sanción.

No es limpia esta ley si en ella prevemos cómo deben financiarse las posibilidades de nuevos ingresos para los judiciales de distintas provincias, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de ellas, como Entre Ríos, ya tienen solucionado el problema presupuestario en lo

referente a sus tres poderes. El problema que da lugar a esta ley es eminentemente laboral. Establece la autarquía del Poder Judicial y pone de relieve una jerarquización, un encuadramiento y una secuencia de situaciones que permiten afirmar que sus normas son completas.

El artículo 7º fue introducido por este Senado con nuestra oposición, y se refiere a la financiación en las provincias que necesitan regularizar hasta el momento su situación judicial. Los problemas de financiación para las provincias se tratan por medio del presupuesto nacional. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las provincias en cuanto al régimen de financiación de los presupuestos provinciales deben materializarse por medio de una posible ley de coparticipación federal o en el presupuesto, que actualmente está en elaboración en el Ministerio de Economía para ser enviado al Congreso de la Nación. En su momento ambas Cámaras estudiarán en qué medida podrán ser provistos los fondos necesarios para financiar las urgencias de los presupuestos provinciales.

Es decir, señor presidente, que hay aquí dos aspectos totalmente distintos. Uno debe ser tratado ahora, como corresponde, para terminar con un problema acuciante para todo el sector judicial. El otro tiene que ver con la financiación de las provincias, con la correlación de los ingresos del sector judicial en ellas y los que rigen en el orden nacional.

En consecuencia, señor presidente, quiero dejar sentada la posición de esta bancada en el sentido de que consideramos que seguir insistiendo en el artículo 7º constituye "un tronco en la vía" hacia la solución del problema. Esta cuestión deberá ser tratada en el momento de considerarse la coparticipación federal o la ley de financiación de los presupuestos provinciales, que quizá tratemos en esta misma sesión. Nuestra posición es clara. Mantenemos el punto de vista que hemos venido sosteniendo en el sentido de que ésta es una ley laboral, e insistimos en que este artículo 7º no debe incorporarse, por tratar un tema diferente.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Villada.** — Señor presidente, señores senadores: quiero hacer uso de la palabra brevemente para referirme a los principios que sustenta el señor senador por la Capital.

Nosotros, en el bloque justicialista, entendemos que no hay ningún inconveniente para que

pueda insertarse en una ley una disposición como la que contiene el artículo 7º.

En efecto, las disposiciones que deben contener las leyes que prevén algún tipo de financiamiento se encuentran establecidas en la ley de contabilidad y en la ley permanente de presupuesto. Del análisis de estas disposiciones no surge ninguna que establezca impedimento para introducir una disposición como la del artículo 7º.

Por otra parte, independientemente de estas consideraciones técnicas, tenemos que incursionar en la justicia de las medidas que debe sancionar este Senado.

No podemos consagrar, a través de una ley, una terrible discriminación entre los trabajadores, entre los magistrados que prestan servicio en el orden nacional y en el orden provincial, máxime teniendo presente que no están separadas territorialmente sus funciones —tal podría ser el caso si los magistrados nacionales prestaran servicios únicamente en la Capital Federal y los provinciales en cada una de sus jurisdicciones—. Todos sabemos que hay funciones correspondientes a la magistratura nacional que se cumplen en todo el territorio provincial.

Señores senadores: adviertan qué horrible discriminación será que un juez nacional gane un sueldo muy superior al que en este momento pueden atender las provincias con sus magros recursos. Este es el sentido que debe prevalecer en nosotros al sancionar la norma. Debemos buscar el tratamiento equitativo para todos, con justicia en la norma, la cual regulará un importante aspecto, el de las remuneraciones.

Por lo dicho, este bloque no compartirá el criterio de la Unión Cívica Radical de que hay obstáculo para sancionar una disposición de esta naturaleza. Es más: nuestro bloque va a persistir en el tema de la justicia para que no se establezcan discriminaciones y distinciones odiosas para la misma clase de trabajadores. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Señor presidente: este proyecto que oportunamente elevara el Ejecutivo lleva ya más de seis meses de consideración. Se trató entonces de dar respuesta a los jueces de la Corte que solicitaban una remuneración acorde con la jerarquía que ostentaban.

Compartimos ese criterio, pero también en ese momento hicimos una modificación al artículo 3º, y yo escucho al señor representante de la Capital hablar sobre la parte económica, de cómo se deben manejar las provincias según el artículo 7º. Y esto lo tomo con pinzas, por cuanto ya es-

tamos a fin de junio y todavía no tenemos presupuesto. En otras palabras, esto viene del año pasado. Pensábamos aplicarlo este año pero todavía no hemos dicho qué partidas les corresponden a las provincias teniendo en cuenta los nuevos sueldos que tendrían los magistrados.

Creo que es errónea esta actitud, porque sé que vamos a llegar al mes de noviembre y estaremos discutiendo el presupuesto cuyo proyecto llegó a la Cámara baja y volvió al Ministerio de Economía —de acuerdo con la última información existente— a raíz del cambio en el signo monetario.

Nos da la sensación de que con este proyecto se pretendió quedar bien con los jueces pero se omitió a quienes son sus colaboradores más estrechos, es decir los empleados de la justicia. Nosotros creemos en la justicia y en los jueces, pero sin buenos colaboradores los jueces no van a poder hacer justicia. Por eso nuestro bloque ha entendido que un proyecto de este tipo debía contemplar a los compañeros trabajadores judiciales.

Esta nueva ley de enganche que se ha incorporado en el proyecto no tiene nada que ver con la ley de enganche original. Y como bien decía mi compañero de bancada el senador Rodríguez Saá, se está pretendiendo dejar sin efecto una vieja conquista de los trabajadores judiciales.

He escuchado a la bancada radical expresarse acerca de esta supresión del artículo 7º. Ahora me gustaría saber qué piensan de los trabajadores judiciales: si merecen la solidaridad en esta ley o no. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Al someter a este Honorable Senado la consideración de este proyecto de ley en segunda revisión, el señor presidente ha manifestado que se necesitan los dos tercios de votos para poder insistir en las reformas introducidas por este cuerpo cuando se trató en primera revisión.

Como acaba de decir el compañero senador Britos, no conocemos todavía la posición de los otros bloques. La del bloque justicialista ha quedado expresada a través de las palabras de los compañeros preopinantes, quienes han señalado claramente los motivos por los cuales el bloque justicialista insistirá íntegramente en la sanción anterior. Además de las razones dadas por los compañeros en primer término, el bloque justicialista va a insistir en la sanción anterior del Senado porque nosotros somos respetuosos de la palabra empeñada.



Quiero recordar que cuando introdujimos las modificaciones en oportunidad de la primera revisión, fue por un compromiso adquirido por todos los bloques, que permitió salir de la *impasse* que se había producido en el tratamiento del proyecto. Fue una solución a la cual adhirieron todos los bloques y que fue reflejada en palabras alborozadas en este mismo recinto de los representantes de la Unión Cívica Radical. (*¡Muy bien! Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Quiero traer al recuerdo de los señores senadores —y el diario de sesiones no me va a dejar mentir— que el señor senador Berhongaray, quien hizo una prolija exposición en aquella oportunidad, habló de la lealtad con que los bloques habían trabajado en este proyecto. También el señor senador Brasesco, en su encendida alocución, hizo referencia a que este problema había sido tratado juntamente con el gremio representante del Poder Judicial, cuyos integrantes habían subido las escalinatas de este Congreso; y que habíamos considerado mano a mano este tema, encontrando una solución por todos compartida.

Entonces, señor presidente, si queremos ser consecuentes con la palabra empeñada, no podemos adoptar otra actitud que no sea la de insistir en esa sanción. De lo contrario, reitero, no seremos consecuentes con nuestra palabra y nuestros principios. (*Aplausos.*)

Nosotros insistimos en esta sanción porque también actuamos en forma coherente con nuestros principios doctrinarios. Esto es así, pues en los documentos liminares de la doctrina justicialista encontramos el principio de la retribución justa, elevado a la categoría de jerarquía constitucional en la Constitución de 1949 y reproducido en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna; constituye el reconocimiento al trabajo como un factor principal del progreso social.

Entonces, para ser consecuentes con dicha doctrina, debemos mantener esa sanción; porque no fue producto de un acto de demagogia ni ligereza, sino el reconocimiento a la esforzada labor de los trabajadores del Poder Judicial que, junto con los jueces, ejercen la suprema misión de dar a cada uno lo suyo y desempeñan un papel tan importante como el de los magistrados, a quienes reconocemos la excelsa función de dictar justicia. Así, de acuerdo con nuestra doctrina, mantenemos esa posición.

También quiero hacer notar que no nos convencen las razones expuestas en la Cámara de Diputados al tratar la supresión de la compensación funcional en el caso de los empleados.

Se han vertido una serie de argumentos que resaltan distinto tipo de responsabilidad entre los magistrados y empleados; también se hizo referencia a aspectos tributarios que los diferencian y, finalmente, se ha dicho que mientras los magistrados están sujetos al juicio político, los empleados no, como si éste fuera una carga para los jueces y no un derecho o una garantía a la inamovilidad en sus funciones. Es decir que con el afán de justificar la eliminación de esa compensación —que en este caso constituye un acto de verdadera justicia social— se ha revertido hasta el concepto de juicio político.

Insisto, señor presidente, la justicia social no sólo debe ser proclamada en las campañas electorales sino que también tiene que ser cumplida en cada uno de los actos de gobierno. (*Aplausos.*)

Esta compensación funcional ha sido convalidada, reitero, por todos los bloques e integrantes de este Honorable Senado, con el convencimiento de que se trataba de un acto de justicia social. Por este motivo, con todo el respeto que merecen los señores senadores, me permito instarlos a que por unanimidad —como en aquella oportunidad— insistamos en la sanción anterior, estableciendo esa compensación funcional para todos los integrantes del Poder Judicial, tanto jueces como empleados.

En esta forma haremos un acto de justicia y reafirmaremos el principio de la democracia que tiene, en el Poder Judicial, uno de sus pilares fundamentales. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: a veces, las responsabilidades de gobierno nos llevan a tener que tomar actitudes o producir hechos que no son los que siempre quisiéramos.

Durante muchos años hemos sido oposición y sabemos lo que ello significa. Pero también sabemos que ahora tenemos la responsabilidad de gobierno.

Somos conscientes, y lo es todo el país, de que estamos pasando —y ésta no es una frase hecha— por el peor momento de la historia económica argentina.

Nuestro presidente lo ha dicho con toda claridad. No ha tenido inconvenientes en expresarlo desde un balcón de una plaza, donde muchas veces se juntaron multitudes para escuchar lo que querían escuchar. Y ese día se juntaron multitudes para escuchar...

**Sr. Rodríguez Saá.** — Algunos se fueron.

**Sr. Berhongaray.** — ...lo que debían escuchar. Y lo que debía escuchar nuestro pueblo.

concentrado en esa histórica plaza no era, quizá, lo que hubiera querido escuchar. Con ese coraje de los estadistas, con esa decisión que solamente tienen los grandes hombres en los grandes momentos cuando se cambia la historia de un pueblo, nuestro presidente le habló de frente a su país y le dijo: ésta es la realidad argentina, éstos son los esfuerzos, los sacrificios que vengo a pedirle a mi pueblo. Yo sé que el pueblo lo va a entender.

Algunos se retiraron de la plaza; los más se quedaron sorprendidos. Hubo quienes criticaron el contenido, y otros la oportunidad. Pero, verdaderamente, cuando el presidente realizó esta reforma importantísima, que viene a sacudir como un golpe de Estado al estado de inflación y no al estado de derecho, como se dijo, el país respondió como lo hacen los países en los momentos decisivos en que son convocados a plantarse en la vertical de sus responsabilidades.

No ha fallado el bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Senadores cuando durante la sesión que realizó internamente el día de ayer decidió apoyar la sanción llegada de la Cámara de Diputados. No falló en su palabra, ni en la lealtad a los compromisos que ha asumido.

Fuimos nosotros quienes nos reunimos con las dirigencias de los empleados judiciales para tratar de buscar en aquel momento una solución que permitiera recobrar las escalas porcentuales que, como una conquista social, reclamaba con toda justicia el gremio judicial. Hicimos un esfuerzo, tratamos de compatibilizar opiniones y, modificando el propio proyecto de nuestro Poder Ejecutivo, volvimos a las escalas tradicionales porque creíamos que ése era el punto fundamental que debíamos rescatar. Eso era lo preeminente, mientras que lo demás podía ser tema de conversación ya que era casi contingente.

Somos conscientes de que esta ley tendrá una vigencia de un año y medio solamente. Por eso, por encima de aspectos coyunturales, nos importaba mantener la estructura de los porcentuales históricos. Y así lo hicimos. No hemos fallado en nuestras palabras ni en nuestras lealtades. Tengan este absoluto convencimiento, compañeros senadores de todas las bancadas: es otro el país que tenemos; es otro país el que vivimos. Es la necesidad de la solidaridad social la que nos lleva...

—Manifestaciones en las galerías.

**Sr. Presidente.** — Como única advertencia, la Presidencia solicita a la barra que se abstenga de formular cualquier manifestación. De lo contrario, será desalojada de inmediato.

Continúa en el uso de la palabra, señor senador.

**Sr. Berhongaray.** — Decía que el sentido de solidaridad social nos lleva a los senadores radicales a apoyar la sanción de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que esta autarquía permite la fijación de las remuneraciones del Poder Judicial por la Corte Suprema. Esto ha venido a reafirmar la idea central que inspira todo este proyecto: aumentar la independencia del Poder Judicial; ése es el punto fundamental en la estructura legal. El mantenimiento de las escalas porcentuales históricas es el fundamento en el terreno social. La duración de un año y medio constituye un plazo demasiado chico para el esfuerzo, si es que a esto le podemos llamar esfuerzo, en lo referido a los reclamos que hacemos a todos los sectores vinculados con el Poder Judicial para que definitivamente podamos terminar con esta ley.

Yo digo que no es una injusticia social y lo sostengo con toda sinceridad. Desde abril, en que analizamos este proyecto, hasta el mes de junio los empleados judiciales van a tener, con relación al resto de los empleados de la administración pública, un treinta por ciento más de sueldo en términos reales. Es decir, aquellos 430.000 pesos equivalen a 670 australes de hoy, que van a ser el límite de remuneración para un ministro de la Corte. La cifra original se indexó al ciento por ciento de la inflación de cada mes durante estos tres últimos meses; mientras tanto, para el resto de los empleados de la administración central, por la razón de vivir en un país empobrecido —que nosotros no empobrecimos—, se indexaron sus sueldos al 90 por ciento de la inflación mensual.

Entonces, yo me pregunto qué significa el concepto de justicia social cuando es el que también nos mueve al fijar las remuneraciones de todos los agentes asalariados del país. Los empleados del Poder Judicial cobrarán un adicional del 25 por ciento si tienen título universitario, tal como sucede con la inmensa mayoría de los empleados de la administración central y de las empresas del Estado. Pero ese adicional por título no lo cobran los funcionarios y magistrados judiciales. Alguien dirá que, en esos casos, el título es inherente a la función; sin embargo, también es inherente a la función de director de hospital el poseer el título de médico o ser abogado para ejercer la

función de director de Asuntos Jurídicos. En todas las reparticiones estatales se cobra el adicional por título, menos en la Justicia.

Por todo esto, honestamente, no estoy convencido de que estemos cometiendo un acto de injusticia social. Si analizamos los sueldos que se van a determinar sobre la base de 670 australes para este mes...

**Sr. Britos.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Berhongaray.** — Permítame terminar, señor senador. Después le doy la palabra. (*Aplausos en las galerías.*)

Decía que si analizamos los sueldos que se van a fijar, nos vamos a encontrar con que en la categoría de empleados judiciales, un prosecretario jefe de segunda va a percibir este mes 415 australes, y si tiene título 518 australes. Un oficial primero cobrará 335 australes, y con título, 418,75. Un auxiliar de sexta, yendo hacia las categorías inferiores, percibirá 207,70 australes y, si tiene título, llegará a 258. En la última categoría, auxiliar principal de sexta, el sueldo será de 140 australes; si el empleado tiene título cobrará 175 australes.

No sé si esto es justo; quizá algunos deberían cobrar mucho más. Pero estoy absolutamente convencido de que hay muchos sectores que se encuentran en una situación muy por debajo de ésta.

Pido a los compañeros judiciales que, por encima de sus justas reclamaciones o de la emotividad del momento, hagan un nuevo esfuerzo por el país. Como ya dije, no sé si esto es lo justo, pero sí sé que es lo que se les puede dar en este momento.

Les pido que nos entiendan; se los pido por este gobierno, por esta democracia, por nuestro país. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

**Sr. Solana.** — Voy a definir, señores senadores, el voto del Movimiento Popular Neuquino.

Después de haber escuchado las exposiciones de los señores senadores, especialmente las del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y del senador Berhongaray, debo decir que he apreciado con mucho mayor entusiasmo esta última en un debate anterior, cuando se reconoció que la porcentualidad establecida en el proyecto que sancionó la Cámara de Senadores había constituido un éxito, que mejoraba el propio proyecto del Poder Ejecutivo y que se había logrado merced a la colaboración del gremio de empleados judiciales.

Las expresiones emotivas y exaltadas con que el señor senador inició su discurso deberán ser analizadas en su momento, cuando el Senado se aboque a la consideración de la situación económica de la Nación.

Con respecto a este proyecto, al que quiero circunscribir mi exposición, simplemente debo agregar que tiene que existir coherencia en las determinaciones del Honorable Senado. Oportunamente, éstas fueron adoptadas por unanimidad y no han variado las circunstancias que llevaron a ello.

No podemos manejarnos en el terreno de las ficciones o de las ilusiones. El señor senador Trilla quiere una ley limpia, concepto novedoso en materia de legislación. Pero ocurre que esta ley limpia enturbiará tanto las relaciones de los gobiernos provinciales con su personal que se transformará en extremadamente oscura y perniciosa. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Como señaló el señor senador Villada, en las provincias no es posible desconocer la realidad. El personal judicial, que realiza tareas análogas y muchas veces superiores a las de la Justicia Federal, pretenderá naturalmente, por estricta justicia, ganar lo mismo que el personal de los juzgados federales. Pero sucede que los gobiernos provinciales no cuentan con los recursos suficientes para adecuarse a esta realidad.

Por ello, la inclusión del artículo 7º responde a una verdadera necesidad coyuntural, que según el señor senador Berhongaray puede durar un año y medio. Y bueno, que dure ese año y medio o hasta que se incorpore en el próximo presupuesto la partida correspondiente. Pero no puede votarse una ley sin que se hayan previsto los fondos que se requieren para su cumplimiento. En realidad, se va a votar una ley que no podrá cumplirse en la mayoría de las provincias argentinas.

El sentido de nuestro voto es ratificar la sanción originaria y rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Señor presidente: había solicitado una interrupción al señor senador por La Pampa porque a medida que exponía me iba quedando una duda.

Se entiende que cuando llegamos a ocupar una banca en el Senado de la Nación asumimos algunas responsabilidades y tenemos noción en principio de lo que está pasando económicamente en el país.

Estaba observando que cuando tratamos en primera revisión este proyecto de ley fue el 11 de abril y el señor presidente de la Nación habló en Plaza de Mayo el 26 de abril, a escasos quince días de ese tratamiento; y evidentemente los legisladores no conocíamos qué estaba ocurriendo económicamente en el país. Entonces, levantábamos la mano para quedar bien con los compañeros judiciales.

Ese es un acto de irresponsabilidad porque el estar en una banca nos da derecho a tener iniciativas y a decir, por ejemplo, que un profesor puede ganar 280 ó 340 australes por mes, y lo podemos votar afirmativamente, pero posteriormente la Secretaría de Hacienda nos va a decir que no.

Todos somos conscientes de la situación económica, tal como expresaba el señor senador por La Pampa. Por eso a los peronistas nos fue tan mal, porque teníamos un compromiso con los trabajadores y a la vez temíamos abrir mucho la boca en los actos públicos ofreciendo salarios que sabíamos que posteriormente no íbamos a poder otorgar.

El señor senador por La Pampa se entera recién de la situación económica cuando el presidente de su partido y también de la Nación le notifica en Plaza de Mayo que las cosas están mal. Pero ¿cómo puede ser que el señor senador ignorara hasta ese momento cuál era la situación económica en la que nos debatíamos los argentinos? Evidentemente, esa crisis la heredamos de la dictadura militar y en alguna medida teníamos que tratar de manejarla una vez institucionalizado el país porque los ciudadanos argentinos nos eligieron y nos colocaron en estas bancas para que tratáramos de producir en el país, no cambios coyunturales, sino estructurales. (*Aplausos.*)

Este país sigue aguardando que al concepto de la justicia social lo podamos vertebrar definitivamente. Seguimos creyendo en los amigos radicales porque a ustedes los eligieron para conducir y no estamos aquí tratando de juntar votos para noviembre porque también tenemos conciencia de la situación por que atraviesa el país. Por eso quiero expresar a mi estimado colega, el señor senador por La Pampa, que no puede ser que recién se notifique de la situación económica cuando habló el señor Presidente.

Sabíamos cuál era la situación del país y la conocían hasta los propios empleados judiciales, pero tampoco deseaban leyes de privilegio para determinados sectores, que nosotros respetamos, como el caso de los señores jueces. Pero alejar

tanto a sus colaboradores de los sueldos así como también a los funcionarios de las más altas jerarquías de la justicia no es razonable.

Esta es la interrupción que deseaba efectuar al señor senador por La Pampa. No soy un economista; simplemente he sido un dirigente gremial, pero aclaro que muchas veces he tenido miedo de levantar demasiado la voz en una asamblea ofreciéndole a mis compañeros lo que posteriormente no iba a poder darles. En ese sentido, aquí debemos actuar con un poco de responsabilidad.

Nosotros somos solidarios con la ley de los compañeros judiciales, pero esto se tendría que haber frenado antes para que fuera más equitativo. Yo no sé si está bien o mal que un compañero gane 175 o 200 australes. Eso lo debe determinar su mujer, que es la ministra de Economía en su casa. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Lo que sí tendría que determinar yo, si fuera oficialista, es una política coherente con la del Poder Ejecutivo. De lo contrario no estaría representando al partido gobernante. Por eso de aquí en más en las comisiones vamos a tener que discutir sobre estos puntos con más profundidad, así como en su momento, y por mi intermedio, este bloque solicitó la vigencia irrestricta de la ley 14.250 para que los compañeros trabajadores, junto con sus patrones y la representación del Estado, pudieran discutir sus convenios.

Me pregunto, efectivamente, si los trabajadores judiciales tuvieron oportunidad de discutir su convenio en esta emergencia. Este convenio ha sido elaborado desde arriba, y cuando un convenio se elabora desde arriba no se da respuesta a lo que quieren los de abajo. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: si no fuera porque ya llevamos más de un año y medio compartiendo estas bancas; si no conociera al señor senador por San Luis; si no estuviera un poco acostumbrado a su modo de decir las cosas y a veces de falsear la verdad, me hubiera sentido sorprendido. ¿Cómo se le ocurre al señor senador por San Luis? Yo comprendo que él está en una interna y que tiene sus problemas, pero no tiene derecho a agredir.

**Sr. Rodríguez Saá.** — ¿Qué tiene que ver la interna con lo que ha dicho?

**Sr. Berhongaray.** — No tiene derecho a agredir, y es una agresión lo que él ha dicho: que un senador de la Nación no conoce la realidad

económica del país. Es una lástima que el señor senador por San Luis no haya leído la solicitada que publicó en el día de hoy la Federación Judicial Argentina, que dice que el señor senador de la Unión Cívica Radical doctor Antonio Berhongaray había manifestado el 10 de abril: "Es deseo unánime de todos los integrantes de este cuerpo mantener la conquista social representada por los porcentajes históricos del 'enganche'. Sabemos que el país está empobrecido, pero también sabemos que los reclamos son justos". Eso decía Berhongaray. ¡Qué lástima que no lo haya leído el señor senador por San Luis!

De todos modos, y volviendo al tema, quiero recordar que en ningún momento la Unión Cívica Radical ha acordado ni votado el artículo 7º. Eso fue introducido a medianoche, después de un cuarto intermedio en la sesión del 10 de abril a la noche. Si alguien piensa que eso significa faltar a una palabra, tengo que decir que nosotros no faltamos a la nuestra.

Pero además habíamos dicho que ese 25 por ciento opcional no era obligatorio; que la Corte podía —lo dice el texto de la ley— aumentar o no aumentar. Yo no sé si la Corte va a hacer uso de la facultad que tiene para aumentar hasta un 25 por ciento las remuneraciones. Podría llegar a hacerlo —o no— con los empleados, funcionarios y magistrados.

Cuando hicimos entonces la exposición de motivos expresamos claramente que no era necesario que estos aumentos fuesen igualitarios. No ha cambiado tanto la situación. Confiamos —y lo dijimos entonces— en la responsabilidad y en el sentido de justicia social de nuestra Corte Suprema; sentido de justicia social que fue desconocido por algunos de los senadores aquí presentes. Lo dijimos entonces y lo reiteramos ahora: estamos absolutamente convencidos de la responsabilidad con que nuestra Corte Suprema de Justicia se ha manejado y se seguirá manejando.

Simplemente quise con estas palabras decirle al señor senador por San Luis que conocíamos la gravedad del momento, que no nos notificamos ese día. Pero sí se notificó el pueblo argentino, reunido multitudinariamente en Plaza de Mayo, de que el Presidente le pedía un esfuerzo adicional. Ese es el país distinto que vivíamos: el del 10 de abril y el del 26 de abril.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

**Sra. Gurdulich de Correa.** — Señor presidente: en honor a las palabras del señor senador por La Pampa, en el sentido de que hablemos

con la verdad, no puedo permitir que queden en el aire las palabras que pronunció en su anterior alocución, marcando una diferencia entre la época en que el pueblo escuchaba lo que quería escuchar, y ahora, que escucha lo que debe. Es una alusión directa al teniente general Juan Domingo Perón y a la relación de él con su pueblo.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sra. Gurdulich de Correa.** — La Plaza de Mayo era ocupada por los argentinos para escuchar a su conductor, el teniente general Juan Domingo Perón, quien sí decía lo que nosotros queríamos escuchar, porque encarnaba nuestras necesidades y los profundos intereses de la Nación Argentina. No se trataba, como quiso dejar traslucir el señor senador, de que lo que el pueblo quería escuchar en la Plaza eran palabras demagógicas. No es así, señor presidente, porque los argentinos hace mucho tiempo dejamos de ser masa. Por lo contrario, somos un pueblo que sabe que sus intereses están ligados a un interés superior: el de la Nación Argentina.

Por eso no podemos plantear que los trabajadores judiciales están detrás de un interés particular. Creo, insisto, que los trabajadores argentinos saben muy bien que sus propios intereses están ligados al interés superior de la Nación.

No podía dejar sin contestación la diferencia marcada por el señor senador. Siempre escuchamos lo que quisimos escuchar, no porque se tratara de palabras fáciles, sino porque reflejaban lo que necesitaba nuestra patria. Por eso vamos a sostener nuestra posición en este tema y en todos aquellos en los que estén en juego la justicia social y la soberanía de nuestra Nación. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Marini.** — Señor presidente: los colegas han señalado ya las razones técnicas que determinan que esta bancada insista en el voto que dio cuando esta Cámara aprobó el proyecto. Como presidente de la Comisión de Interior y Justicia, no puedo menos que destacar la validez de esta resolución legislativa que tiende a otorgarle autarquía al Poder Judicial de la Nación. Pero además quiero señalar, porque ésta es la verdad fundamental que aquí se ha señalado de manera no del todo clara, que con la reforma introducida por la Cámara de Diputados no hacemos más que marcar que estamos realmente sometidos a los dictados del Fondo Monetario Internacional.

Esto ha quedado desgraciadamente confirmado con las palabras del señor senador Berhongaray en su primera intervención en esta sesión. Porque ha terminado por reconocer que el Poder Ejecutivo ha decidido aumentar los sueldos a los jueces y funcionarios, y eso se hará a costa de dejar sumergido en sus ingresos al sector de los trabajadores. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Berhongaray.** — ¡No! Hablemos en serio, señor senador.

**Sr. Marini.** — Y esto no es más que cumplir, desgraciadamente, en la letra de la ley las instrucciones —no serán públicas, pero evidentemente por algo las adopta el partido gobernante— del Fondo Monetario Internacional. Eso significa que sean los sectores asalariados, los de menores recursos los que paguen la crisis, como siempre ha sucedido en nuestro país. Por eso la bancada justicialista se opone a este proyecto, porque de una vez por todas tenemos que terminar con que el pueblo trabajador sea el que pague los platos rotos, porque él es el que pone siempre el esfuerzo y sale perdiendo. Si no es por la inflación que devora sus salarios y agua sus ingresos, eso ocurre con medidas de este tipo en donde claramente, a través de una ley, se lo posterga, obligándolo a pagar el costo del aumento a otros sectores que no llamaré privilegiados pero que evidentemente al Estado interesa beneficiar, aunque siempre a costa de los trabajadores.

A todo esto se opone nuestro movimiento para que terminemos de una vez por todas con este sacrificio injusto que no quiere nuestra bancada.

En mi carácter de presidente de la Comisión de Interior y Justicia del Senado de la Nación, es mi deber velar por una buena administración de justicia. Y no puedo dejar de señalar que esta ley ha de provocar tremendos conflictos en la administración de justicia dentro de los poderes judiciales de las provincias, y se traducirá en una profunda alteración de la paz social.

No es lo que quiere mi movimiento, ni este bloque, ni lo que necesita el país. El país requiere soluciones armónicas y que la justicia sea para todos. En una verdadera justicia social no se posterga al que menos tiene sino que, al contrario, se elevan los ingresos de los que menos tienen para darles un marco digno en que vivir como verdaderos seres humanos, no postergados en sus necesidades para que otros se beneficien con ese sacrificio. (*Aplausos en las galerías. Suena la campana de orden.*)

Por eso, señor presidente, está de más decir que la postura del bloque justicialista es en defensa de una verdadera justicia social, en defensa de una ley que ha sido votada en seis artículos por unanimidad en esta Cámara, y en defensa del federalismo. Este también será destruido porque el Estado nacional mira con indiferencia la suerte de los estados provinciales, máxime cuando por una situación de hecho y por una anterior ley de coparticipación federal la mayoría de los recursos —originalmente de las provincias— son percibidos por la Nación, que las despoja en realidad de su disposición y administración.

Daremos esta ley, que se traducirá en perjuicio de una buena administración de justicia y en alteración de la paz social y el orden público, porque los gobernadores no van a poder hacer frente a esta erogación. Este proyecto que viene aprobado por la Cámara de Diputados y al que tenemos que oponernos nosotros con dos tercios hace que se vean inmersos en un verdadero caos social a muy corto plazo, a raíz de esta norma que se pretende aprobar.

Dejo así fundado mi voto en favor de la ratificación de la sanción anterior del Senado, rechazando las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Sánchez.** — Señor presidente, señores senadores: el proyecto que estamos considerando, que apunta a un sector de la comunidad argentina, ha motivado que los interesados se hicieran presentes y en alguna medida constituyeran una tribuna aprobando con su aplauso lo que les gusta y reprobando con su silencio lo que no les es grato.

Es oportuno este momento para tratar de desbrozar la maraña en que se encuentra nuestro país. Es por eso que no vengo a buscar el aplauso, sino a hablar a mis compatriotas argentinos en su calidad de ciudadanos.

Aquí ha hecho crisis un sistema, y quizá no percibamos el momento histórico que vivimos en su real dimensión porque de alguna manera todos somos protagonistas de él. Llevados por nuestros sentimientos, por nuestros egoísmos y por nuestras ilusiones, quizá no lo podamos ver en el marco de una realidad.

Los hombres que hemos caminado desde nuestra adolescencia un largo y azaroso camino en busca de una sociedad mejor hacemos el esfuerzo de no perder el tren de la historia, de ubicarnos.

Yo sé que si mañana tratamos el salario de los obreros de la carne o de los estibadores se dará este mismo problema. Por eso digo que aquí hizo crisis un sistema, y comparto las palabras del señor senador por La Pampa en el sentido de que este momento histórico está alumbrando otro país, otra Argentina que, mal o bien, a través del tiempo, con todos sus errores, nos ha conducido a este atolladero.

Señor presidente: estaba recordando cuando el señor senador por La Pampa hablaba de oposición y de posturas fáciles de demagogia. Pero me acuerdo cuando se produjo aquel brutal cimbronazo político-social que le cambió la faz al país el 17 de octubre de 1945, concretándose en aquellos limpios comicios del 24 de febrero de 1946, de la salvaje y despiadada oposición —porque no cabe otro término— del radicalismo.

**Sr. Otero.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Sánchez.** — Sí, señor senador.

**Sr. Otero.** — Quiero darle la razón al señor senador Sánchez: tengo edad suficiente para recordar perfectamente esa etapa de la historia.

Yo también fui opositor salvaje. Lo reconozco y estoy profundamente arrepentido. Muchas veces he agradecido a Crisólogo Larralde, quien fue el primer radical que vio en ese movimiento al auténtico pueblo argentino, al decir aproximadamente: "Entre esos que van en las columnas que llaman **desarropados**, me veo yo de muchacho...", como bien él sabía expresarlo y no yo.

Eso sucedió en 1946, pero los argentinos aprendimos. En 1973 el radicalismo era diferente; fue el que hizo que Balbín dijera: "El que gana gobierna y el que pierde apoya". Es así como nosotros aprendimos y lo seguimos haciendo.

Le doy la razón al señor senador por La Rioja con respecto a lo que señaló en 1946, pero debe reconocer que el radicalismo no actuó de la misma manera en 1973. (*Aplausos.*)

**Sr. Sánchez.** — No puede imputarse al bloque peronista...

**Sr. Velázquez.** — Justicialista, señor senador.

**Sr. Sánchez.** — Yo soy peronista. (*Aplausos.*)

El bloque de senadores peronistas durante más de un año estuvo contemporizando para darle tiempo suficiente al gobierno surgido el 30 de octubre de 1983, como una esperanza del país, para que acomodase las cosas y así entre todos poder comenzar a caminar. Desgraciadamente el oficialismo no entendió nuestra actitud.

El señor presidente no podía ignorar el caos económico, el quebrantamiento moral del pueblo

argentino, enviciado y envilecido por una política que lo alejó de los intereses del país para lanzarlo en un individualismo egoísta. Debíó convocar al pueblo a la Plaza de Mayo el 31 de octubre, es decir al día siguiente de ganar las elecciones, para que todos asumiésemos la responsabilidad frente a la historia. Pero no fue así; su primer acto fue arremeter contra los sindicatos, como si ése fuese el problema más agudo que aquejaba al país.

Así las cosas, el señor presidente convocó al pueblo argentino luego de un año y medio de asumir su mandato para decirle lo que no expresó en su oportunidad.

La sensación de una política económica errática se tradujo cuando nosotros invitamos —y no interpelamos— al señor ministro de Economía, doctor Grinspun, quien ni siquiera pudo suministrarnos las cifras exactas de la deuda externa; sólo expresó ambigüedades. Y esto es lo que a nosotros nos preocupaba, señor presidente.

No podemos seguir en silencio sin llamarle la atención al gobierno. Es cierto que estamos en campaña electoral y que, por lo tanto, las críticas son más duras; pero somos fieles a nuestra escala de valores: en primer lugar, el país. Por este motivo seguimos soportando la ofensiva de la demagogia radical, que mediante una sostenida y ampulosa propaganda, no pierde momento para mostrarnos lo que no es.

El señor presidente nos ha dicho que estamos en una economía de guerra; yo diría que es de posguerra, porque la guerra que se libró contra el pueblo con las armas, con la tortura y la entrega ha terminado y hemos comenzado la reconstrucción. Y nosotros queremos participar pero no deseamos, de ninguna manera, ser sólo convidados.

El carro de la República está empantanado y le decimos al partido de los gobernantes: bájense del pescante y pechemos todos juntos. Pensamos así porque, por encima de nosotros y de nuestros egoísmos está el país, el nuestro y el de nuestros hijos.

Debemos pacificar los espíritus pero, para ello, necesitamos el valor de resignar las posturas políticas en aras de la felicidad del pueblo.

Este hecho surge del tratamiento de este proyecto en donde se habla de justicia y de justicia social. Señores: nunca habrá justicia social si no comenzamos por las herramientas liberadoras. Me refiero a la soberanía política, que no es otra cosa que tener el valor de romper con los centros internacionales de poder, a costa del sacrificio que podamos hacer, para tener la autodeterminación; esto traerá como consecuen-



cia la independencia económica para que manejen nuestros recursos, de los cuales saldrá la distribución equitativa para lograr así la justicia social. Ese es el trípode sobre el que se asienta el destino de la República.

Aquí, señores, debemos tener conciencia de la gravedad de la hora. Ya vamos a discutir las medidas económicas que ha tomado el gobierno, que son tímidas a mi criterio. Este es un abceso lleno de pus al que pretendemos romper con una aguja cuando debemos usar el bisturí. Ya sé que es más fácil pervertir que moralizar. Y en nuestro país, más allá del deterioro económico, que no es tal —como podemos demostrarlo con las cifras de producción—, hay una perversión moral en donde todos hemos buscado la vida fácil mediante la especulación y nos hemos dejado arrastrar y seducir por los intereses y las monedas extranjeras para especular y no para obtener ese capital en función del trabajo porque —esto es cierto— no había garantías.

Por eso, señor presidente, Honorable Senado, agradezco que no me hayan declarado fuera de la cuestión porque creo que esta digresión era necesaria para que pongamos los pies sobre la tierra. Es necesario que el gobierno entienda que el peronismo está dispuesto —como siempre lo estuvo— a colaborar con la opinión mesurada y concreta, libre de demagogia. Esperamos que el gobierno comprenda nuestro mensaje y que no puede seguir trasladando a la esfera gubernamental su interna partidaria. No puede ser que leamos en los diarios que señores funcionarios pelean por tener un rango de secretario de Estado, por ejemplo. No puede ser, señor presidente, que no se tenga una política cohesionada y definida. Porque ayer decíamos que los contratos petroleros que vamos a firmar no se pagarían en crudo y hoy los diarios dicen que así se pagarán. Es decir, señor presidente, Honorable Senado, es necesario que abramos el gran debate y yo creo que con cualquier motivo que exista, como este tratamiento de un convenio laboral, en el cual reafirmo la posición de mi bloque, que no es otra más que la consecuencia de lo que sostuvimos al comienzo. Es por eso que me permito decirle al gobierno, que maneja la renta pública y las relaciones internacionales, que él sabe dónde está el mal. Atrevámonos, entonces, a cortar los tentáculos de ese pulpo que nos succiona y asfixia. Atrevámonos, entonces, a soportar el hambre, pero hagámoslo todos; que el hilo no se corte por lo más delgado. De ese modo

habremos comenzado a levantar el edificio destruido de la República. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Trilla.** — Señor presidente: quiero adelantar la posición de mi bancada en cuanto a que sostendremos y enfrentaremos cualquier tipo de debate sobre los distintos aspectos que hacen a las situaciones políticas, económicas y sociales de la República y sobre el programa económico que el gobierno está llevando a cabo.

Por otra parte, de acuerdo con lo manifestado en este debate por los distintos señores senadores que han intervenido, también contestaremos aquellas referencias a nuestras relaciones como país socio del Fondo Monetario Internacional, a esta altura de los acontecimientos y de la historia universal.

También diremos, si viene al caso, que los radicales, cuando fuimos oposición en algún momento de la historia y muy particularmente entre 1973 y 1976, dimos mayor crédito para que el gobierno del justicialismo pudiera trabajar, a pesar de que estaba bastante enclenque para aquel entonces, y nuestro partido contribuyó en gran medida para sostenerlo.

También daremos nuestra posición ante cualquier otro tema que esta Cámara crea conveniente considerar. No rehuiremos ningún debate.

A esta altura, debemos centrarnos exclusivamente y adecuar nuestras disertaciones alrededor del asunto vinculado con el proyecto de ley que estamos analizando. Sobre esta materia, quiero decir que en la oportunidad en que el Senado analizó el proyecto enviado en revisión por la Cámara de Diputados, los dictámenes de las respectivas comisiones que intervinieron oportunamente fueron firmados unánimemente por todas las bancadas. También debo decir que la ley pudo salir aprobada por unanimidad, en cuanto a la autarquía del Poder Judicial y a otros aspectos laborales del sector, si hubiésemos procedido en aquel momento con otra perspectiva. En aquella ocasión se introdujo en el curso del debate un asunto que con toda claridad anticipamos que iba a resultar "el tronco en la vía", dificultando la continuidad del proceso en la Cámara de Diputados.

Si el texto hubiera salido aprobado exclusivamente con los seis artículos que se votaron afirmativamente por absoluta mayoría de nuestro cuerpo, la Cámara de Diputados habría aceptado esas disposiciones y convertido en ley nues-



tra sanción. Es necesario que diga esto frente a las actuales circunstancias.

Reitero que la introducción en el debate, en forma sorpresiva y sin conocimiento de las bancadas radical y de los partidos provinciales, de las disposiciones contenidas en el artículo 7º, constituyó un entorpecimiento del proceso legislativo.

Está claro que los señores senadores de los partidos provinciales apoyaron la posibilidad de que sus respectivos estados pudieran financiar los mayores gastos de las justicias locales cuando, por simpatía, quisieran adherirse a los beneficios previstos para el orden nacional.

Pero también es cierto que nosotros dijimos que el artículo 7º era un injerto que entorpecería las disposiciones de la ley. Si se continúa de la misma manera, también puede presentarse una circunstancia semejante que entorpezca en el futuro las decisiones de este Senado.

De modo que solicito a los señores senadores que definan su posición exclusivamente con respecto a este proyecto de ley, sin entrar en otras consideraciones ni adjetivos, como ocurrió en algunas de las disertaciones de los señores senadores coloreadas con matices políticos de oposición de barricada. De continuar así, deberíamos intervenir para defender nuestra posición y hacer frente a las imputaciones, sean ellas claras o veladas.

No queremos demorar más la sanción; deseamos que salga de aquí esta noche como una disposición firme y definitiva, como ley de la Nación. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Martiarena.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Martiarena.** — Señor presidente: voy a recoger la invitación que formuló el señor senador Trilla, y como la hizo para que no nos desviemos del tema en debate, me referiré únicamente a las afirmaciones que vertió en cuanto a éste.

Desde luego, nos conmina, nos invita a que depongamos nuestras actitudes, porque insistir en el artículo 7º no es conveniente pues, según él, se ha convertido en el obstáculo para la sanción de esta ley en Diputados. Pero esto no es cierto, porque el proyecto vuelve al Senado con dos objeciones: las de los artículos 3º y 7º. Si realmente hubiera sido el artículo 7º el motivo de las discrepancias, sólo él habría sido modificado. De manera que parte de un error.

Voy a recoger también aquello de que no nos hagamos imputaciones ni nos digamos adjetivos, si bien él dijo jocosamente —a pesar de que por su temperamento, me parece a mí que no tiene

demasiado sentido del humor— que nuestro gobierno entre 1973 y 1976 era enclenque. Este es un calificativo que corre por su cuenta. Si tuviera que contestarle —que no lo voy a hacer—, diría que las características que se le están dando a este gobierno radical de un año y siete meses no lo señalan como enclenque sino en franca picada hacia la decadencia y el fracaso. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Velázquez.** — Ya vamos a ver el año que viene.

**Sr. Martiarena.** — En cuanto a lo que es específico, ese artículo 7º que introdujimos en resguardo de los derechos de nuestras provincias, debo decir que con el transcurso de los días y lo ocurrido con el mal denominado plan económico se acrecienta nuestra desconfianza acerca de las soluciones que puedan darse.

Y existe una circunstancia documentada. Me refiero a un reportaje al señor Canitrot, que tiene bastante que ver con el llamado plan, publicado en el diario "Ambito Financiero" del día 19 de junio, parte del cual voy a leer textualmente: "En relación con el compromiso asumido para no emitir, Canitrot señaló que la vigilancia estará a cargo 'de nosotros, ésa es nuestra tarea'. Agregó que, respecto a presuntos problemas que puedan presentarse con las provincias, en relación con la coparticipación federal, 'acá hay un presupuesto, lo que pidan de más, deberán reducirlo de otra obra que van a suprimir'".

Es decir que este señor, que seguramente debe tener y tiene altos méritos como tecnócrata, se permite emitir una opinión negativa acerca de los resultados que pueda tener la petición justa de los gobernadores de provincias sobre la coparticipación federal antes de que se produzca la reunión ya programada por el presidente de la República con los gobernadores para tratar los problemas relacionados precisamente con dicha coparticipación.

Como dije, vamos perdiendo la confianza. Por ello, sostengo que debemos insistir en nuestro artículo 7º ya que así este funcionario, con todos los méritos que tenga, se encontrará ante una decisión política, con "P" mayúscula, tomada por el Congreso de la Nación en función de las facultades que le otorga la Constitución, en el sentido de que el Tesoro nacional acuda a ayudar a las provincias a solventar el mayor gasto que tendrán con motivo del proyecto de ley que estamos tratando sobre la recomposición de los sueldos y salarios de la Justicia.

Por lo expuesto, para recuperar la confianza, votemos afirmativamente este asunto que es

justo y razonable dentro de la situación tristemente difícil que están viviendo la República y nuestras provincias.

No quiero ser repetitivo porque en una intervención anterior, cuando este asunto fue considerado en primera revisión, destaqué la injusticia flagrante que resulta para las provincias la discriminación entre los magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia Federal con los de nuestras provincias. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: quería contestar una introducción a esta deliberación que hizo el señor senador por La Pampa respecto a la Corte Suprema, a la que le adjudicaba la virtud de actuar con justicia social, haciendo referencia a expresiones del que habla en oportunidad del anterior debate sobre este asunto, según las cuales habría cuestionado la posibilidad de que la Corte Suprema obrara con justicia social.

Creo que el señor senador por La Pampa confunde lo que es administrar justicia a actuar y hacer realidad la justicia social. No tengo ninguna duda de que el alto tribunal en sus numerosos fallos muchas veces hará coincidir la aplicación del derecho positivo con el derecho natural y por lo tanto muchos de ellos podrán ser considerados fallos justos, aunque también otros podrán ser injustos. Pero lo que cuestiono es la posibilidad o la atribución de la virtud que el señor senador por La Pampa otorga a la Corte Suprema en el sentido de que, con relación al proyecto de ley que vamos a sancionar y la aplicación de ese 25 por ciento, la Corte Suprema actúe con justicia social.

No se trata de que no confíe en que la Corte Suprema pueda en algunos casos aplicar este 25 por ciento adecuándolo a una realidad socio-económica de los compañeros trabajadores judiciales y, en algunos casos, pueda aproximarse a la justicia social.

Pero la realidad es que esta Corte Suprema a la cual se le pretende dar esa virtud, no actuó con justicia social y eso lo vamos a comprobar cuando solicitemos las acordadas —asunto que trataremos la semana entrante— según las cuales ha declarado ilegal el paro de los compañeros judiciales... (*Aplausos en las galerías.*)

—Suenan las campanas de orden.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Ya en el pedido de informes que suscribió el señor senador Britos y para el cual se ha votado una preferencia en

la sesión de hoy, solicitamos que se remitan esas acordadas, no sólo la que ha declarado ilegal el paro sino otra serie por las que tenemos entendido que han aplicado sanciones a los compañeros judiciales y también se les aplicaron descuentos en los haberes por estos paros que han hecho estos trabajadores para venir a reclamar por este proyecto de ley de porcentuales, que es un derecho que tienen desde hace muchos años. (*Aplausos en las galerías.*)

Por eso los peronistas nos oponemos y nos oponemos en aquel momento a atribuirle esa virtud a la Corte Suprema. Queremos que en la ley conste la justicia social y para ello deben quedar perfectamente establecidos los porcentuales, ya que tampoco es cierto que el simple hecho del adicional por título puede traer algo de justicia social al problema de los trabajadores judiciales.

Como bien lo señaló el señor senador por San Luis, cuando se va a comprar la carne o el pan, el almacenero no hace descuento por título. (*Aplausos en las galerías.*)

Lo que nos llama la atención es que se pretenda adjudicarnos la culpa de la introducción del artículo 7º en defensa de nuestras provincias. Los senadores somos precisamente representantes de las provincias y jamás vamos a renunciar al derecho de defenderlas.

Además de cuestionar el proyecto por la supresión de ese artículo 7º, lo hacemos por la reforma introducida por la Cámara de Diputados al derogar la aplicación del porcentual a los compañeros judiciales. (*Aplausos en las galerías.*)

Al iniciar este debate sostuvimos que con la modificación de la Cámara de Diputados se deformaba por ese solo hecho el porcentaje y se lo reducía en cerca del 10 por ciento. Quiere decir que los compañeros que gozaban del 50 por ciento ahora verán disminuida la relación al 40 por ciento, y más aun en lo sucesivo, hasta desaparecer totalmente el porcentaje. Esta es la realidad y de esto no habla el bloque oficialista. No ha dicho nada del artículo 3º, firmado por unanimidad. Ahora se deroga el porcentual, pero todo lo que hablamos en la sesión anterior se refería al derecho justo de los trabajadores a gozar de él.

Nosotros sostenemos...

**Sr. Berhongaray.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Rodríguez Saá.** — El señor senador no ha sido generoso para dar interrupciones. Se la pidió yo, se la pidió el senador Britos, pero el señor senador por La Pampa está enojado con San

Luis y no ha querido concedernos interrupciones. (*Risas. Aplausos en las galerías.*)

El que habla no concede la interrupción solicitada.

**Sr. Berhongaray.** — Ahora el que está enojado es el señor senador.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Sí, señor, devuelvo la cortesía.

En definitiva, señor presidente, queremos que nuestras provincias no se conviertan en un polvorín de huelgas. Queremos que ellas compartan los derechos del puerto, ya que los jueces provinciales hacen los mismos sacrificios que los de la justicia nacional. Los trabajadores judiciales de las provincias tienen los mismos problemas que los de la Nación y nosotros queremos que la igualdad sea para todos y bien elevada. Queremos que se discuta el artículo 3º que todos votamos porque consideramos que el porcentual era justo, pero hoy vemos que va a desaparecer. Nosotros queremos que no sea la Corte Suprema la que hable de justicia social sino que sean las leyes de la Nación las que lleven escritas esas mismas palabras: "justicia social". (*Aplausos en las galerías.*)

En la próxima sesión vamos a hablar de las acordadas de la Corte Suprema en que se declaraba ilegal el paro, se aplicaban sanciones a los compañeros judiciales y se les hacían descuentos en los sueldos. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Simplemente quiero hacer una aclaración.

Creo que el señor senador por San Luis está confundido. Quizá no haya leído detenidamente el artículo 3º, que se refiere a los porcentuales históricos de siempre; no al proyecto del Poder Ejecutivo que modificaba los porcentuales sino a los que sancionamos nosotros. Eso está claro. ¿Lo entiende así el señor senador?

**Sr. Britos.** — Usted sabe que no tiene nada que ver.

**Sr. Berhongaray.** — El señor senador es el que ha provocado una confusión.

**Sr. Britos.** — No, no es así.

**Sr. Berhongaray.** — Es absolutamente claro. No cabe ninguna discusión. Los porcentajes a los que se refiere la sanción que viene de Diputados son exactamente los mismos que hemos sancionado nosotros, sin la posibilidad, por supuesto, del plus del 25 por ciento.

**Sr. Rodríguez Saá.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Britos.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Berhongaray.** — Sí, señor senador.

**Sr. Rodríguez Saá.** — ¿A quién se la concede?

**Sr. Berhongaray.** — A San Luis. (*Risas.*)

**Sr. Britos.** — No encuentro que sea lo mismo, señor senador. La referencia a magistrados y/o funcionarios desaparece.

**Sr. Berhongaray.** — Los porcentajes son los que hicimos nosotros.

**Sr. Britos.** — ¿Cómo ha venido de Diputados?

**Sr. Berhongaray.** — Es lo mismo. Lo único que se eliminó es "y/o empleados". (*Risas.*)

Señor presidente: deseo hacer una pequeña aclaración para que no quede ninguna duda. El proyecto que vino por primera vez de Diputados, que era del Poder Ejecutivo, había reducido las escalas históricas. Hasta aquí estamos de acuerdo. Nosotros derogamos el artículo 4º y retomamos las escalas históricas, estableciendo ese plus facultativo, que en nuestro proyecto no estaba necesariamente sujeto a enganche. Ahora la Cámara de Diputados mantiene las escalas históricas, que son las que nosotros sancionamos, y elimina la posibilidad de esa facultad de enganche, de ese veinticinco por ciento. Elimina la referencia a los empleados, pero no elimina la conquista social, las escalas permanentes por las cuales tanto se ha luchado.

Esto debe quedar absolutamente claro. Dentro de un año y medio, cuando esta ley deje de tener vigencia y las condiciones económico-sociales del país seguramente hayan cambiado, no por obra del gobierno sino por decisión de todo el pueblo argentino, podremos volver a debatirla, y necesariamente tendremos que hacerlo ya que su plazo de vigencia es hasta fin del año que viene. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — La Presidencia advierte que los oradores se han repetido cuatro o cinco veces en el uso de la palabra.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Gracias, señor presidente.

**Sr. Lafferrière.** — Solicito que por Secretaría se dé lectura al artículo 132 del reglamento, numeración anterior. Pido que se haga cumplir el reglamento.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Estoy en el uso de la palabra.

**Sr. Lafferrière.** — Es una moción de orden, señor presidente.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Insisto en que estoy en el uso de la palabra.

**Sr. Lafferrière.** — ¡Está violando el reglamento!

**Sr. Rodríguez Saá.** — No se ponga nervioso, señor senador.

**Sr. Lafferrière.** — Insisto en que se dé lectura al artículo 132 del reglamento, según la numeración anterior.

**Sr. Presidente.** — Hay una moción de orden.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Estoy en el uso de la palabra.

**Sr. Presidente.** — La Presidencia entiende que debe considerarse la moción de orden.

**Sr. Britos.** — El señor senador se ha olvidado de que este asunto no tiene dictamen, y está violando el reglamento. Habría que declarar a la Cámara en comisión. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Por Secretaría se dará lectura al artículo 143 del reglamento vigente, antes artículo 132.

**Sr. Secretario (Macris).** — (*Lee*): “En ella, cada orador sólo podrá hablar una vez, para fundar en pro o en contra, y otra vez para sólo explicar, concisamente, lo que juzgue habersele entendido mal, pero observándose, respecto del que sostenga la discusión y del autor del proyecto, lo prevenido en el Título X”.

**Sr. Marini.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Marini.** — Pido que se lea el artículo 138 del reglamento.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Es el caso en que estamos ahora.

**Sr. Presidente.** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Macris).** — Se refiere al uso de la palabra y dice: “Podrá, también, cada orador hablar cuantas veces pida la palabra, la cual se otorgará por el presidente al primero que la pidiere...”.

**Sr. Lafferrière.** — Antes tiene que estar constituida la Cámara en comisión.

**Sr. Secretario (Macris).** — Es el título referido a la Cámara en comisión.

**Sr. Presidente.** — Ya se han cumplido los pedidos de lectura solicitados.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Voy a continuar en el uso de la palabra. Tiene razón el señor senador Berhongaray en que está establecido el porcentual y en que hay un plus del 25 por ciento que

la Corte Suprema puede adicionar a los sueldos de los magistrados y/o de los funcionarios, pero no de los empleados. Lo que está en discusión no es la vigencia del porcentual sino que de hecho con esta regulación legal lo hacemos desaparecer, lo derogamos.

Es que la Corte fija el sueldo, y sobre él se aplica el porcentual; y la Corte puede adicionar al sueldo del magistrado y/o del funcionario, pero no de los trabajadores, un 25 por ciento.

En un primer momento el sueldo de los trabajadores, por la ley del porcentual, puede llegar al 50 por ciento.

Sin embargo, al adicionar este 25 por ciento, aquel 50 por ciento ya no será tal y se convertirá en un 40. Con sucesivos aumentos seguirá disminuyendo. Si los sueldos se triplican o cuadruplican, este 50 por ciento quedará reducido solamente a un 20, y así hasta desaparecer, con lo que queda derogado el porcentual.

Aparentemente esto no es así, pero en realidad lo verán los compañeros trabajadores en la medida en que se aumenten los sueldos. Y no creemos que la Suprema Corte tenga la virtud o el atributo de aplicar la justicia social. Por eso estamos firmemente persuadidos de que dentro de un año y medio los compañeros trabajadores no ganarán el 50 por ciento o el porcentual prometido sino cuatro o cinco veces menos. Esto es lo que sostenemos. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Saadi.** — Señor presidente: las medulosas exposiciones, no rebatidas, formuladas por los señores senadores de la bancada justicialista y por el señor senador representante de los bloques provinciales me relevan de la obligación de entrar en mayores consideraciones sobre este asunto.

Quiero decir sólo dos o tres cosas junto al anuncio, como jefe de la bancada justicialista, de que nuestro bloque votará unánimemente por la insistencia de la sanción anterior del Honorable Senado de la Nación.

En primer lugar creo que es injusto, cuando se habla de demoras en el Senado, atribuir las por lo menos al bloque justicialista. Hemos sido muy cuidadosos en procurar que este tema se trate con la mayor urgencia, porque significaba una solución temporaria a la angustiosa situación de la familia del Poder Judicial.

No sólo hemos sido cuidadosos sino que no nos hemos negado a tratar el problema sobre tablas en la sesión pasada, cuando ingresó a la

Cámara, si la bancada de la Unión Cívica Radical accedía a insistir en la sanción anterior del Senado.

Se ha hecho referencia, con mucho acierto, a que hay un sistema que ha muerto y que ésta no es una cuestión coyuntural. Ni siquiera es una situación estructural. Aquí se impone un cambio de sistema, de estructuras, si es que queremos salir de esta situación tan difícil y afligente para el país.

Con parches, con aspirinetas, no se resuelve este problema, sino con medidas serias, de fondo, revolucionarias, capaces de dar respuesta a esta situación que nos aflige, abriendo de par en par las puertas de la esperanza para motivar al pueblo argentino a trabajar unido para salvar a la patria.

Sin perjuicio de que esto lo diga con carácter general, quiero acudir al patriotismo de los señores senadores representantes de las autonomías provinciales. No me llama la atención la postura del señor senador por la Capital, porque no tiene las responsabilidades específicas en la materia que tenemos los senadores de las provincias, quienes debemos abogar para que tengamos una justicia bien remunerada en la medida de lo posible. Pero una sola justicia; no una justicia de primera y una justicia de segunda.

Las provincias, por lo menos las peronistas, no están en condiciones de resolver el problema de los sueldos de los empleados de la justicia. Es más: creo que casi todas están imposibilitadas de resolverlo.

Bien se ha dicho aquí que se va a crear una agitación social que no va a beneficiar a nadie. Por eso acudo a los representantes de las provincias para que, sobre las banderías partidarias, demos una solución justa para una sola justicia y que mantengamos la sanción anterior de este cuerpo que contemplaba la posibilidad de que las provincias puedan resolver el problema igual que la Nación.

Por otra parte, con respecto a la modificación que se refiere a la cuestión del personal, entiendo que una razón superior de justicia y de humanidad nos obliga a mantener dicha sanción.

Por las circunstancias expuestas, señor presidente, dejo fijada oficialmente la postura del bloque de senadores justicialista, que insistirá en la sanción del Senado. *(Aplausos.)*

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

**Sr. Nápoli.** — Señor presidente, señores senadores: en mérito a las expresiones vertidas por los representantes de este bloque, nuestra bancada insistirá en la sanción con el texto tal como vino de Diputados.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si el Honorable Senado insiste en su sanción.

—La votación resulta negativa. *(Aplausos.)*

**Sr. Presidente.** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley venido de la Honorable Cámara de Diputados. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

## 6

## REGIMEN TRANSITORIO DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

**Sr. Presidente.** — Corresponde considerar el proyecto de ley del señor senador Villada y otros señores senadores por el que se establece un régimen transitorio de coparticipación federal de impuestos, de acuerdo con la moción de preferencia aprobada en la sesión anterior.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

**Sr. Trilla.** — Señor presidente, señores senadores: si bien es cierto que había sido aprobada la moción de preferencia para el tratamiento de este proyecto firmado por la mayoría de la bancada justicialista, quiero expresar que ante las circunstancias de conocimiento público, ya han sido cursadas las invitaciones del caso para que este tema sea tratado en primer lugar en el Ministerio de Economía —que es donde corresponde debido a que es un problema de financiación de las provincias—, con los señores gobernadores. A posteriori, el presidente de la República se reunirá con los gobernadores de cada una de las provincias, ampliando la invitación a los señores senadores y diputados que tengan atinencia con el problema presupuestario, directamente afectado por disposiciones de esta naturaleza.

Por lo expuesto, solicito que el tratamiento de este proyecto sea diferido para la primera sesión de la próxima semana.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Saadi.** — Señor presidente: esta cuestión ya ha sido tratada en la sesión anterior, oportunidad en que el señor senador por la Capital manifestó las mismas razones que acaba de expresar. En dicha sesión, la Cámara resolvió considerar el proyecto en esta sesión. Nuestro bloque sostiene, por decisión unánime de sus miembros, que el proyecto debe ser tratado ahora. Conocen la planilla que ha hecho circular el señor ministro del ramo y no la comparten.

Por lo expuesto, no aceptamos la postergación y solicitamos que el proyecto sea considerado en esta sesión.